
Editoriales

EL ESTIGMA DE LA INSOLIDARIDAD

RECIENTES episodios de la vida española nos obligan a reflexionar en voz alta. Tras la acampada de los vecinos de Villaverde que montan guardia permanente para que no se inicie la construcción de un poblado gitano, tras las patrullas mal llamadas ciudadanas que han realizado batidas contra drogadictos y camellos en Valencia, Barcelona y Tarragona, tras las reiteradas negativas de diversos municipios (catalanes, aragoneses, gallegos y madrileños) a permitir que en sus términos se instalen centros de rehabilitación, cárceles o simples basureros, tras los brotes de xenofobia que se advierten en diversas partes, es urgente preguntarnos dónde está nuestra solidaridad y cuáles son los límites que una sociedad debe poner a su propio egoísmo.

Estamos blandiendo contra la población marginal un rejón de fuego que deja en nuestra piel el estigma de la insolidaridad. Es fácil tranquilizar nuestra conciencia denunciando a quienes se niegan a tener por vecinas a unas familias gitanas. Es fácil atribuirles posiciones racistas y abogar en abstracto por la construcción de viviendas dignas para los gitanos. Es fácil pedir políticas para la reinserción, siempre frágil, del drogadicto rehabilitado, del alcohólico, del recién salido de la cárcel. Pero ¿dónde están los ciudadanos dispuestos a aceptar en su cercanía lo que critican en los demás?

Para que este editorial sea algo más que un ejercicio ineficaz de sensiblería, algo más que un acallamiento retórico de nuestras maltrechas conciencias, tenemos el deber de incorporar a la reflexión la razón solidaria en todos los niveles y con todas las consecuencias.

Nivel de denuncia

** Denunciamos al Gobierno por quebrantar la justicia distributiva al no exigir a todos los estratos de la sociedad el mismo esfuerzo social: la política de construcción de prisiones, de ubicación de cementerios de residuos tóxicos, de construcción de basureros, de centros de rehabilitación...,*

□ □

prefiere sistemáticamente los suburbios y las zonas rurales más deprimidas, haciendo así pagar a los pobres un tributo cien veces más oneroso que el que exigen a las clases altas. Si en materia fiscal todos admitimos, en nombre de la justicia distributiva, el carácter progresivo de los impuestos, deberíamos exigir la misma progresividad cuando se trata de repartir las cargas sociales. Pero, si no tenemos el coraje de exigir esta progresividad, resulta irrenunciable al menos que se aplique el principio de igualdad.

DENUNCIAMOS a las autoridades nacionales, regionales y municipales por quebrantar así mismo la equidad social al programar la construcción de viviendas para la población marginal cerca de poblados que apenas han salido de la marginalidad, por realojar a los gitanos en las proximidades de la Elipa o de Villaverde y no cerca del barrio de Salamanca en Madrid, o en la Quinta Julieta y no en las zonas residenciales de Zaragoza. Además de la hiriente injusticia directa, estas medidas producen efectos indirectos que agravan las desigualdades: es sangrante comprobar cómo los pisos modestos de las zonas próximas se han desvalorizado en más de un 20 por 100, mientras los pisos de las zonas residenciales mantiene unas tasas de revalorización galopante.

** Denunciamos la falta de firmeza de la autoridad cuando, en casos excepcionales, ha planeado la construcción de centros para la rehabilitación de drogadictos en áreas de alto standing para retractarse después ante la protesta de los poderosos que viven en las mismas, como ha sucedido en la zona norte de Madrid y en casi toda Cataluña.*

** Denunciamos a muchos denunciadores de racismos ajenos que no son capaces de confesar el propio, a una gran parte de la sociedad biempensante que no tiene el coraje de mostrarse insolidaria a pecho descubierto y que, sin embargo, maniobra en los despachos con todo el peso de su influencia para eludir la prestación de este tipo de servicio social. «Todos somos Villaverde», pero con el agravante de que muchos enfundan en guante blanco —más sutil y dañino— su flagrante insolidaridad.*

** Denunciamos a los simplificadores de cuestiones complejas, que en editoriales de periódicos o incluso en plegarias públicas están provocando la náusea de Dios al que*

piden con los labios la solución de unos problemas que no podrán solucionarse sin su colaboración ciudadana.

** Denunciamos a la insolidaria Europa que nos da un nefasto ejemplo con sus medidas anticipatorias contra el riesgo de que crezca la población inmigrante, que alude a un impresentable ius sanguinis frente al universal y prevalente ius hominis. Esa Europa de la prosperidad está incubando o resucitando de nuevo los monstruos del racismo y la xenofobia que creíamos en trance de extinción. También en España, siguiendo el ejemplo francés, suizo o alemán, se pueden estar incubando formaciones políticas en cuyo ideario aparezcan sin pudor las proclamas más insolidarias, enmascaradas en alardes de pseudopatriotismos. El hecho de que la protesta insolidaria de los suburbios esté por ahora en manos de la izquierda no debe hacernos olvidar el peligro de que tales banderas sean enarboladas finalmente por las ideologías ultramontanas, con todo lo que ello significa.*

Nivel de propuesta

EN las denuncias anteriores subyace una serie de propuestas que queremos hacer explícitamente patentes.

** En primer lugar, los programas de desmarginalización deben ser objeto de una discusión nacional en la que intervengan todos los sectores de la sociedad y, en primer lugar, las propias minorías afectadas. ¿Se ha preguntado a los gitanos, por ejemplo, si prefieren seguir siendo ghettos dignificados en poblados exclusivos para ellos, o si, por el contrario, desean una vivienda no previamente estigmatizada sino dispersa entre la población paya? Esta discusión debe aclarar cuál es la política más racional, más eficaz, más rápida y más respetuosa para las peculiaridades culturales de cada comunidad.*

** Una vez aclarados estos puntos, las medidas que de ellos se deriven, legitimadas por el Parlamento, deben ser impuestas obligatoriamente a todo el cuerpo social por el poder coercitivo del Estado.*

** Los ciudadanos deben exigir a los partidos políticos una postura expresa y un programa concreto de actuaciones. El*



concepto ético de voto informado exige que el ciudadano conozca la propuesta operativa que cada formación política ofrece para solucionar con criterios de igualdad y firmeza este problema que es uno de los más graves con que se enfrenta nuestra sociedad.

** Todos debemos reexaminar nuestros posos de insolidaridad. Nuestra conciencia no puede acallarse por mantener lejos los problema. En este pleito todos somos denunciadores y denunciados.*

